

OPINIÓN

Rodrigo Varela
Gerente Legal de ALTO Inmune.



¿Con licencia médica o de vacaciones?

Comienza el 2025 y, con ello, para muchos llegan las tan ansiadas vacaciones. Sin embargo, también se inicia un fenómeno radicalmente negativo: el preocupante aumento de licencias médicas falsas durante el verano.

Según los datos recopilados por Inmune, esta tendencia muestra un incremento significativo en esta época del año. Sólo entre enero, febrero y marzo de 2023, la emisión de licencias médicas falsas por parte de médicos grandes emisores aumentaron en un alarmante 96%.

Es que en los últimos años, en Chile, se ha normalizado que las personas extiendan sus vacaciones justificándose mediante licencias médicas falsas. Esta práctica, que algunos trivializan o justifican como un simple "recurso" para desconectarse del trabajo, es en realidad un delito grave con implicaciones legales, éticas y sociales.

Nosotros, en ALTO Inmune trabajamos desde la base que todas las personas tienen derecho a una licencia médica cuando se enferman, pero también hemos sido testigos de que hay personas que abusan de este derecho, transformándose en un círculo vicioso.

Lo primero que debemos entender es que, al comprar una licencia médica falsa, no sólo se está incurriendo en una acción deshonesta, sino que también en un delito penado por la ley. Las sanciones no sólo recaen sobre los médicos que emiten estos documentos fraudulentos, sino también sobre las personas que los adquieren y utilizan. Por ejemplo, una persona que adquiere una, arriesga multas de hasta \$16 millones de pesos o tiempo de cárcel que puede ir desde 61 hasta 3 años".

Esto constituye un abuso del sistema de salud y un golpe a la confianza en instituciones que deben estar enfocadas en atender a quienes realmente lo necesitan.

Ahora, más allá de las consecuencias legales y morales, esta situación también refleja un problema de fondo que no podemos ignorar: En Chile, persiste una preocupante falta de conocimiento, como sociedad, respecto a las graves consecuencias de adquirir licencias médicas falsas y persiste una "livianidad" respecto a la ilegalidad que se incurre al falsificar estos documentos.

Estas acciones no sólo constituyen un delito

que puede acarrear sanciones legales, sino que también generan un impacto negativo que trasciende a la empresa en la que se trabaja. El daño afecta directamente al sistema de salud, sobrecargando recursos que deberían destinarse a quienes realmente los necesitan, y perjudica a la sociedad en general, debilitando la confianza y la equidad en el acceso a servicios esenciales.

Y, por ello, creo que también es urgente reflexionar sobre este punto. La necesidad de "vacaciones a la mala" es un síntoma de una falta de conciencia sobre esto. Mientras no abordemos estos factores de manera estructural, es probable que este tipo de conductas fraudulentas sigan proliferando.

Bajo este contexto, las empresas desempeñan un rol fundamental al velar por el uso adecuado del beneficio de las licencias médicas. Para ello, es esencial que se apoyen en expertos en disuasión y prevención, implementando estrategias efectivas que promuevan la transparencia y la responsabilidad en los entornos laborales.

Porque al final del día, cuando un trabajador solicita una licencia falsa, no sólo está estafando a la empresa donde trabaja, sino que también está afectando a sus compañeros, ya que son ellos quienes deberán asumir una sobrecarga de trabajo. Esto convierte el problema en algo más que una cuestión de afectación a la producción: es un tema humano que impacta directamente en el ambiente laboral y en la relación entre los trabajadores.

Por otro lado, creo que es fundamental un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, dado que ambos desempeñan un rol clave en la prevención y sanción de estas prácticas ilegales. El sector público, a través de políticas claras y una supervisión eficiente, debe garantizar que se detecten y sancionen estas irregularidades. Por su parte, el sector privado, especialmente las instituciones de salud y aseguradoras, tiene la responsabilidad de implementar sistemas de control y verificación más estrictos y tecnología avanzada para identificar fraudes.

Solo mediante una colaboración estrecha y coordinada entre ambos sectores será posible erradicar este problema, proteger los recursos del sistema de salud y fortalecer la confianza de la ciudadanía en su funcionamiento.